

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 55 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 15° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2080-2020
CARATULADO : SANTANDER/FISCO DE CHILE

Santiago, trece de Septiembre de dos mil veintidós

VISTOS:

Con fecha 27 de enero de 2020, comparece doña Paz Becerra Urzúa, abogada, domiciliada en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins N.º 252, oficina 42, comuna y ciudad de Santiago, en representación de don Regulo Jaime Illanes Silva, pensionado, domiciliado en Ramón Carnicer Oriente 3173, Arica, Región de Arica y Parinacota; don Sergio Estanislao Arenas Cortes, pensionado, casado, domiciliado en el Cid 871, Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana; doña Patricia Waleska Guzmán Venegas, pensionada, domiciliada en Calbuco 3766, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Región Metropolitana; don Celso Nasario Calfullán Campos, pensionado, domiciliado en Leonor Osorio 2734, comuna de Recoleta, Santiago; don Juan Erasmo Puga Chaparro, domiciliado en Abdón Jara 936, comuna de Machalí, y don Filemón Santander Escobar, pensionado, casado, domiciliado en San Dionisio 2880, departamento 339, Santiago, e interpone demanda de indemnización de perjuicios por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en juicio ordinario en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, comuna y ciudad de Santiago.

En cuanto a los antecedentes de hecho específicos de cada uno de los demandantes, expone lo siguiente:

Respecto de don Regulo Jaime Illanes Silva, relata que lo tomaron detenido el 18 septiembre de 1974, época en que era estudiante en la universidad técnica del estado (UTE) en la carrera de técnico en administración personal. Su detención ocurrió en el desfile del 18 septiembre en el paradero 13 de Vicuña Mackenna, comuna de La Florida, por personal de Carabineros quien lo retuvo 1



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

noche en la comisaría con golpes y amenazas para luego ser trasladado finalmente a la penitenciaría de Santiago, permaneciendo detenido en total 11 días, luego fue liberado debiendo firmar en la fiscalía militar que estaba en calle Ejército en el centro de Santiago. Indica que la detención le produjo mucho daño principalmente psicológico, miedo constante a la autoridad, no puede vincularse desde la confianza, piensa que puede volver a ocurrir y o torturen rompiendo nuevamente con su vida. Fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas", elaborado por la Comisión de Asesora Presidencial para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados. Su registro como víctima es el N° 4225.

Don Sergio Estanislao Arenas Cortes, relata que fue detenido la primera vez en mayo de 1979 a la salida de la iglesia San Francisco, por la SICAR, la inteligencia de Carabineros, trabajaba como comerciante en esa época y era simpatizante de izquierda. Lo llevaron a la Primera Comisaria de Santiago, lo interrogaron permaneció 3 días en ese lugar, lo golpearon y torturaron porque no quería ficharse, se negaba porque eso era quedar como un delincuente. Luego fueron drogados al parecer a través de la comida, porque los llevaron a la Fiscalía Militar, querían que firmaran documentos, como no quería lo torturaron y pasaron a la Penitenciaría de Santiago, donde permaneció una semana aproximadamente, en la Galería 5 de los presos políticos antiguos. En 1981, lo detuvo la Central Nacional de Inteligencia, allanaron su casa ubicada en calle Batuco, comuna de Pudahuel, y estuvo luego en manos de Policía de Investigaciones bajo custodia un total 5 días, de día y de noche lo interrogaban y amedrentaban psicológicamente. En esa época ya tenía familia, un hijo de 6 años, la incertidumbre de no saber qué pasaría con nosotros, ese es el daño que causan las amenazas, un temor constante. En total fueron dos semanas aproximadamente que permaneció detenido. Fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en etapa de reconsideración", elaborado por la Comisión de Prisión, Política y Tortura.

En seguida, doña Patricia Waleska Guzmán Venegas, fue detenida en 1983 durante tres días en una protesta contra la dictadura y llevada a la 11° Comisaria de Lo Espejo, era dirigente de alfabetización en las poblaciones. En la comisaría la apalearon totalmente con lumas y abusaron sexualmente por carabineros de la 11° Comisaría de Lo Espejo. En año 1986, en el interior del pedagógico, lugar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

donde estudiaba, la balearon y llevaron a la Vicaría de la Solidaridad. Después participaba activamente por la defensa de los derechos humanos, indica que en esas condiciones era imposible que la llevaran a un hospital, la podían matar, por eso la llevaron a la Vicaría y ellos gestionaron ayuda médica. Sobre el daño, quedó con mucho miedo, le allanaban la casa, a su familia la amedrentaban, se encuentra con tratamiento psiquiátrico y psicólogo, tiene fibromialgia a raíz de estos hechos. Fue reconocida por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas 2", de la Comisión de Prisión, Política y Tortura, conocida como Listado Valech 2. Registro como víctima es el N° 3903.

Respecto de don Celso Nasario Calfullán Campos, relata que fue detenido en su casa el 23 septiembre de 1975 por funcionarios de Investigaciones, vivía en calle José Miguel Carrera 3635, Recoleta, tenía 15 años, estaba cursando octavo básico, porque militaba en el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR). Primero lo llevaron a un cuartel de investigaciones ubicado en Recoleta, en la población Quinta Bella, después, a la hora del toque de queda lo llevaron a Villa Grimaldi, eran funcionarios de la Dirección de Inteligencia donde la tortura fue permanente hasta que caía al piso, venía un doctor, le tomaba el pulso y después lo seguían torturando, le aplicaron corriente simulacros de fusilamiento. Relata que lo que más le marcó psicológicamente es que escuchaba como torturaban a un niño para que su padre hablara, después de que lo soltaron estuve como un año mal, despertaba con los gritos de ese niño, lo escuchaba y tenía pesadillas, cuando fue a la Comisión Valech no recordaba las fechas, le costó mucho declarar. Estuvo con psicólogo y psiquiatra después de esa declaración, le hizo muy mal en lo emocional. En cuanto a los daños físicos, el Comité Pro Paz lo evaluó, tenía perforado el estómago, una hernia inguinal y también dieron cuenta de un problema en el hombro. Fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas", elaborado por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. Registro como víctima es el N° 4049.

Don Juan Erasmo Puga Chaparro relata que trabajó en Santiago en la Industria Textil Comandari, desde el año 1966 al 11 septiembre de 1973, día en la cual les comunicaron que tenían que quedarse en la Industria. Frente a Comandari existía un campamento donde se produjeron enfrentamientos armados entre Carabineros y compañeros que se parapetaron en la industria, a la media hora de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

esto llegaron a desalojar la Industria y a los trabajadores de Comandari ahí presentes, los detuvieron efectivos de Carabineros que los trasladaron a la comisaría de San Joaquín, donde fueron torturados y sometidos a malos tratos. Fueron llevados al regimiento Tacna por 2 días, sometidos a torturas por personal del ejército, luego trasladados al Estadio Chile, finalmente al Estadio Nacional hasta el 24 de septiembre de 1973. El abuso contra su integridad física y psicológica ocasionó mucho daño ya que fue ejercido de una forma diseñada específicamente para minar su dignidad como ser humano. La tortura provocó como resultado lesiones psicológicas permanentes, tales como incapacidad de confiar, ansiedad derivada del miedo a que la tortura vuelva a ocurrir, entre otras. Producto de lo anterior y la falta de trabajo, se trasladó a Argentina. Reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas 1", de la Comisión de Prisión, Política y Tortura, conocida como Listado Valech 1. Registro como víctima es el N° 19550.

Por último, don Filemón Santander Escobar, relata que en mayo de 1984, en un acto de aniversario del Partido Socialista donde militaba, en la calle Santiago o Santiaguillo, a la altura de San Ignacio, se encontraba reunido con 8 personas, y de pronto entran una cantidad de civiles de la Central Nacional de Información (CNI), eran unos diez hombres, armados, los insultaron, golpearon, vendaron y sacaron, llevándolos en auto al Cuartel Borgoño, durante tres días, lugar donde lo golpearon con cachetadas, culatazos, le hicieron desnudarse adentro de una celda, le pusieron en una camilla desnudo para debilitarlo psicológicamente llevaron a la Fiscalía Militar, ahí los defendió la abogada Pamela Pereira, un día, los llevaron a la Cárcel Pública, donde permaneció 15 días y los fueron liberando de a poco. Luego en 1985 fue nuevamente detenido por 4 días por la Central Nacional de Información. En esa época ya tenía dos hijos, estaba casado, cesante, tratando de encontrar trabajo, su hijo mayor tenía 20 años y el otro tenía 18 años, pidió ayuda y estuvo casi tres años en terapia psicológica en la Vicaría de la Solidaridad. Permaneció detenido 22 días. Fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas 1", de la Comisión de Prisión, Política y Tortura, conocida como Listado Valech 1. Registro como víctima es el N° 19550.

En cuanto a los fundamentos de derecho, se invocan entre otros, los artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 24, 26 y 38 inciso 2° de la Constitución Política, artículo 4° de la ley N° 18.575; artículos 2319 y 2329 del Código Civil. Además, señalan que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

los hechos descritos configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, entre otros de tortura y persecución, vulnerándose todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los arts. 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales. Sosteniendo la existencia de un principio de imprescriptibilidad de la acción destinada a obtener la indemnización de perjuicios derivados de delitos por lesa humanidad. Esta imprescriptibilidad se basa no solo en el derecho internacional, sino también en principios de carácter interno, internacional y por la misma jurisprudencia de la Corte Suprema.

Finalmente indica que se cumplen todos los requisitos para indemnizar, a saber: acción u omisión de un órgano del Estado (hecho criminal cometido contra sus representados imputable al Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal), existencia de un daño, nexo causal y no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.

Por expuesto, solicita tener por interpuesta la demanda en contra del Fisco de Chile, y condenar expresamente al Estado de Chile a pagar a cada uno de los demandantes a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en contra de cada uno, la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad.

Con fecha 12 de febrero de 2020, fue notificada la demanda personalmente al demandado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

Con fecha 28 de febrero de 2020 comparece el Fisco de Chile, debidamente representado, quien al contestar la demanda solicita su total rechazo, con costas, conforme los siguientes fundamentos:

En primer lugar opone la excepción de reparación integral, fundada en la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes.

Argumenta que la reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos se ha realizado principalmente por medio de tres tipos de compensaciones, a saber: a) transferencias directas de dinero; b) asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, c) reparaciones simbólicas. Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En lo que concierne a la primera modalidad, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos, la discusión radicaba entre quienes sostenían que debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras otros estimaban que a través de una pensión vitalicia.

Indica que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de pensiones la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley N°19.123 (Comisión Rettig) y de \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); en concepto de bonos ha asignado la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley N°19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley N°19.992; en cuanto a desahucio (bono compensatorio), la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley N°19.123; y por Bono Extraordinario (Ley 20.874), la suma de \$21.256.000.000.-

Consecuencia de lo anterior, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio; basta con sumar las cantidades pagadas a la fecha, más las mensualidades que todavía quedan por pagar.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

En cuanto a las reparaciones específicas, señala que La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

De esta forma, conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente, los demandantes han recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación 19.234 y 19.992.

.En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa, se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores

Se concedieron, asimismo, beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Por último, en lo referente a las reparaciones simbólicas, señala que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Indica que este tipo de acciones pretende reparar tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral. A modo de ejemplo destaca la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y, la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DD.HH., tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

Concluye que de todo lo expresado hasta ahora existe una identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones ya realizadas, los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica, tanto la indemnización solicitada en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En segundo lugar, opone como excepción de fondo la prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción.

Señala que según el relato efectuado por los actores, las detenciones ilegales, y torturas que sufrieron, ocurrieron en las siguientes fechas:

1.- Regulo Jaime Illanes Silva fue detenido el 18 de septiembre de 1974, prolongándose dicha detención por 11 días.

2.- Sergio Estanislao Arenas Cortés fue detenido en mayo de 1979 por 10 días y posteriormente en 1981 por 5 días.

3.- Patricia Waleska Guzmán Venegas fue detenida en junio de 1983 por tres días, siendo posteriormente agredida en 1986.

4.- Celso Nasario Calfullán Campos fue detenido el 23 de septiembre de 1975, prolongándose dicha detención por días.

5.- Juan Erasmo Puga Chaparro fue detenido entre el 11 y el 24 de septiembre de 1973.

6.- Filemón Santander Escobar fue detenido en mayo de 1984 por 18 días y posteriormente en mayo de 1985 por 4 días.

Sostiene que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de la notificación de la demanda el 12 de febrero de 2020, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332 del Código de Bello.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

En subsidio, para el caso de que el Tribunal considere que la norma anterior no resulta aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil en relación al artículo 2514, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la demanda transcurrió con creces dicho plazo.

En dicho contexto, precisa que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Aclara que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solo ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Expone que el Pleno de la Excma. Corte Suprema dictó con fecha de 21 de enero de 2013 una sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y zanjó esta controversia señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva (considerando octavo).

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal (considerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo) .

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto (considerando décimo).

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de los demandantes), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los Tribunales de Justicia.

Solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis las argumentaciones hechas valer en este punto y la jurisprudencia posterior al citado fallo, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

De otro lado, señala que la indemnización de perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Por ello, la acción destinada a exigirla, como toda acción patrimonial, está expuesta a extinguirse por prescripción.

Precisa que, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia (citando al pie variedad de la misma), en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, y tal proceder no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue.

Finalmente, refiere en cuanto a las alegaciones del actor en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, precisa que ninguno de los instrumentos internacionales que detalla contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno de esta materia.

Así, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar y no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, corresponde aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En seguida, en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido de \$150.000.000.- para cada uno de los demandantes.

Hace presente en relación al daño moral que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo, en consecuencia recae sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es directamente económico.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando en términos económicos el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, así debe ser regulada en orden a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida y no para tratar de borrar lo imborrable.

De otra parte, señala que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, en consecuencia, el juez habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades, entonces con prescindencia del patrimonio del obligado al pago.

En subsidio de las excepciones de reparación y prescripción además, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En este punto refiere que se debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría que un daño sea indemnizado dos veces, lo que no es jurídicamente procedente.

En un último acápite, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los primeros sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca esa obligación y además, desde que dicha sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, pues antes no existe ninguna obligación para su representado de indemnizar ni suma, en consecuencia, que reajustar.

En lo que toca a los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, de acogerse la demanda, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 7 de marzo de 2020, la parte demandante evacúa la réplica reiterando lo expuesto en la demanda y solicitando el rechazo de las excepciones y defensas opuestas por la contraria en base a los fundamentos que expone.

Precisa que el Fisco no ha controvertido la condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos de cada uno de los actores ni la exposición de hechos contenidos en la demanda, como tampoco ha cuestionado la existencia del daño.

En cuanto a la excepción de pago o reparación satisfactiva o integral sostiene que las normas que su contradictor enuncia, en el mejor de los casos, sólo establecen pensiones de sobrevivencia, que solo ha recibido uno de los demandados de autos, don Octavio Medina. Sostiene que pretender que una pensión que bordea los \$130.000.-mensuales definida por el propio Estado como “austera y simbólica” es la reparación que mandata el Derecho internacional carece de cualquier asidero. Por lo demás, la insuficiencia de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

estas reparaciones estatales puede establecerse comparándolas con el ingreso mínimo que existe en Chile.

Improcedencia de la excepción de prescripción extintiva en atención a que el estatuto legal aplicable al caso concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país en los términos del artículo 5 inciso 2º de la carta fundamental, y de las normas vigentes no puede ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre particulares.

Respecto a la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia del máximo tribunal de la República, en coincidencia con el Derecho internacional de los Derechos Humanos, ha variado el criterio reconociendo el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles o reparatorias que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos, concediendo así la correspondiente indemnización, lo cual es hoy un hecho público y notorio que puede verse semanalmente en la sección de noticias del sitio web del Poder Judicial.

Finalmente, señala que la defensa fiscal cuestiona el monto de lo demandado en atención a lo difícil que resulta en estos casos poder avaluar este tipo de perjuicios que por definición no son de naturaleza patrimonial; sin embargo, la normativa vigente exige presentar peticiones concretas, en subsidio, se pide se condene a la suma que el tribunal estime.

Con fecha 20 de marzo de 2020, el demandado evacúa la dúplica, reiterando las alegaciones excepciones y defensas expuestas en su contestación.

Con fecha 6 de abril de 2020, se recibió a prueba la causa, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 10 de febrero de 2022 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

PRIMERO: Que, compareció doña Paz Becerra Urzúa, en representación de los Sres. Regulo Jaime Illanes Silva, Sergio Estanislao Arenas Cortes, Celso Nasario Calfullán Campos, Juan Erasmo Puga Chaparro, Filemón Santander Escobar y doña Patricia Waleska Guzmán Venegas, e interpuso demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados, a fin que de que se indemnice a sus representados por los perjuicios causados por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones, condenándosele a pagar la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a cada uno de ellos, por concepto de daño moral, más reajustes, intereses y costas.

Lo anterior, por los fundamentos de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, al contestar la demanda el Fisco de Chile solicita su total rechazo por los argumentos ya reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

TERCERO: Que, los demandantes sustentan su pretensión indemnizatoria en el hecho de ser víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra, producto de la detención y torturas recibidas por cada uno de ellos a la que fueron sometidos por agentes del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones, las que produjeron las secuelas físicas y psicológicas que afirman han perdurado en el tiempo.

CUARTO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, toca al actor acreditar los supuestos de hecho en que afinsa su acción.

QUINTO: Que, a objeto de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó la siguiente prueba instrumental, que no fuera materia de objeción contraria:

1.- Certificados emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de cada uno de los demandantes, que certifica que se encuentran calificados como víctimas en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la denominada Comisión Valech.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

2.- Copia autorizada por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech II, por don Patricia Waleska Guzmán Venegas.

3.- Informe Psicológico de evaluación de daños a Patricia Waleska Guzmán Venegas. Emitido por Ps. Miguel Ángel Varas Mendoza con fecha 3 de diciembre de 2019, del Programa Integral PRAIS.

4.- Copia autorizada por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Celso Nasario Caldulán Campos.

5.- Copia de certificado emitido por la Vicaria de la Solidaridad de fecha 27 de abril del año 2000, en el cual se indica que don Celso Nasario Caldulán Campos, fue detenido entre el 23 de septiembre y 14 de octubre del año 1975.

6.- Copia autorizada por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de la Carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Juan Erasmo Puga Chaparro.

7.- Copia autorizada por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Sergio Estanislao Arenas Cortés.

8.- Copia autorizada por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de la carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Santander Escobar Filemón.

9.- Copia autorizada por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Regulo Jaime Illanes Silva.

10.- Certificado de fecha 14 de diciembre de 2021, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que certifica que don Regulo Illanes Silva se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

SEXTO: Que, la demandada por su parte solicitó se oficiara al Instituto de Previsión Social a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado recibidos por los demandantes a través de las leyes de reparación.

A folio 14 consta informe Ord N°64905/2020, de marzo de 2020, del Jefe (S) Departamento Secretaría General y Transparencia Instituto de Previsión Social, que detalla beneficios de reparación Leyes N°s 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874, recibidos por los demandantes.

Sr. Regulo Illanes, pensión Ley N°19.992 la suma de \$16.645.603.-; bono Ley N°20.874 la suma de \$1.000.000.-, aguinaldos la suma de \$312.883.- total a la fecha \$17.958.486.- con una pensión actual Valech de \$189.552.-

Sr. Sergio Arenas, pensión Ley N°19.992 la suma de \$26.819.598.-; bono Ley N°20.874 la suma de \$1.000.000.-, aguinaldos la suma de \$475.162.- total a la fecha \$28.294.750.- con una pensión actual Valech de \$189.552.-

Sra. Patricia Guzmán, pensión Ley N°19.992 la suma de \$16.645.603.-; bono Ley N°20.874 la suma de \$1.000.000.-, aguinaldos la suma de \$312.883.- total a la fecha \$17.958.486.- con una pensión actual Valech de \$189.552.-

Sr. Celso Calfullán Campos, pensión Ley N°19.992 la suma de \$26.932.435.-; bono Ley N°20.874 la suma de \$1.000.000.-, aguinaldos la suma de \$475.162.- total a la fecha \$28.407.577.- con una pensión actual Valech de \$189.552.-

Sr. Juan Erasmo Puga, pensión Ley N°19.234 la suma de \$33.400.478.-; bono Ley N°20.874 la suma de \$1.000.000.-, aguinaldos la suma de \$533.720.-, bono Ley N°20.134 la suma de \$2.570.000.- total a la fecha \$37.504.198.- con una pensión actual exonerado de \$181.448.-

Sr. Filemón Santander, pensión Ley N°19.992 la suma de \$27.713.300.-; bono Ley N°20.874 la suma de \$1.000.000.-, aguinaldos la suma de \$475.162.- total a la fecha \$29.189.462.- con una pensión actual Valech de \$207.250.-

SÉPTIMO: Que apreciando la prueba producida en autos en forma legal,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

aplicando a la instrumental rendida lo prescrito en los artículos 342, 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil en relación con lo estatuido en los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, ha de tenerse por acreditado que cada uno de los actores fueron víctimas de apremios ilegítimos y torturas, en la forma en que se expone en el libelo y en las declaraciones que dan cuenta las carpetas de antecedentes individualizadas en el motivo quinto precedente, con motivo de su detención y por agentes del Estado de Chile, en las fechas que señalan.

Es posible constatar también que los actores han sido beneficiarios en distintas capacidades conforme lo ya detallado en el motivo precedente. Dichos montos obedecen a reparaciones a personas exoneradas por motivos políticos y a los titulares individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

OCTAVO: Que, la primera defensa planteada por el Fisco de Chile dice relación con la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados los demandantes al amparo de los beneficios previstos en las textos normativos precitados, ya sea en transferencias directas de dinero, asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante un conjunto de reparaciones simbólicas que menciona.

NOVENO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 19.992 establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez el artículo 2° prescribe que la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años y a \$1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

o más años de edad; que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición.

La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con aquellas otorgadas en las Leyes N°19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento.

Por su parte el artículo 4° de la indicada ley señala que la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869, de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

A su vez, la Ley N°19.234 estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos (abono de tiempo por gracia, pensión con transacción extrajudicial y pensión no contributiva, última de carácter vitalicio, que otorga el Presidente de la República, a aquellos exonerados políticos que cumplan con los requisitos para ello).

DÉCIMO: Que, el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech.

De las normas legales recientemente relacionadas es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social y no una indemnización del daño moral para reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

En efecto, no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios físicos ilegítimos, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, optando el actor por la pensión otorgada en la Ley N°19.992 que como puede inferirse de la lectura del detalle de beneficios que recibe.

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, no procede imputar a la indemnización debida a cada uno de los demandantes las cantidades que en calidad de beneficiarios de las reparaciones y pensiones hayas recibido ya en su respectiva calidad de preso político o como exonerado político, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación integral.

DUODÉCIMO: Que, enseguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el Fisco demandado en su escrito de contestación.

En primer término, cabe señalar que tratándose de violaciones a los derechos humanos –cúal es la calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo séptimo del fallo –el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos por la parte demandante como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual –vinculada a un negocio común –o extracontractual, sino configurativas de un delito de lesa humanidad del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario. Y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

Foja: 1

es de esta clase en razón de que la pretensión del actor se fundamenta en las torturas de que fue víctima, en completa indefensión, por agentes del Estado que disponían de gran poder de coerción.

DÉCIMO CUARTO: Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad a aquel que sirven de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

Asimismo, se ha constatado que el demandante aparece incorporado en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech II, reconocido como víctima de prisión política y tortura; en tal carácter, en lo tocante a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los convenios o tratados internacionales, las reglas de Derecho Internacional que se consideran *ius cogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que *“el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales”* y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231).

DÉCIMO QUINTO: Que, la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5º de la Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”* y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido



«RIT»

Foja: 1
reclamada en estos autos.

DÉCIMO SEXTO: Que, el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que le haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de Derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución sino también por los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

DÉCIMO OCTAVO: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 señala que las reglas de prescripción *“se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”*, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al Derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

DÉCIMO NOVENO: Que, en el mismo sentido el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó –que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales –en la especie, la de establecer responsabilidades –incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

VIGÉSIMO: Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso 3° del artículo 6° de la Constitución Política de la República y del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que de aceptarse la tesis del Fisco demandado quedarían inaplicadas.



Foja: 1

Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en síntesis, tratándose la tortura de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.



VIGÉSIMO TERCERO: Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.

Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

Como puntualiza el profesor Diez Schwerter, “El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona, pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (DIEZ Schwerter, José Luis. “El daño extracontratual”. Editorial Jurídica de Chile, pág. 88.).

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en la especie, sin perjuicio de no haberse tenido por acompañados los informes psicológicos, atendida su extemporaneidad, la existencia del daño moral en cada uno de los casos de marras puede presumirse de los hechos asentados en la causa atendida la gravedad del hecho ilícito y las circunstancias en que acontecieron y sus consecuencias, con motivo del dolor y angustia tanto físicas como psicológicas que experimentaron cada uno de los actores con motivo de la detención experiencia traumática que sin duda produjo diversos efectos psicológicos como necesario correlato de haber sido víctimas de dichos actos y que justifican la indemnización por daño moral.



«RIT»

Foja: 1

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en la determinación del *quantum* de la indemnización no se considerarán los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos noveno a undécimo que preceden; por ende, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello el tiempo de detención; la innecesaria, irracional y violenta ocurrencia en cada uno de los sucesos relatados y sus perniciosas consecuencias en cada uno de los casos.

Por esta razón se fija la indemnización para don Regulo Jaime Illanes Silva en la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos); y para los Sres. Sergio Estanislao Arenas Cortes, Celso Nasario Calfullán Campos, Juan Erasmo Puga Chaparro y Filemón Santander Escobar y doña Patricia Waleska Guzmán Venegas, en la suma de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos), para cada uno de ellos.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido se le eximirá, en definitiva, del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170 y 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil; 5° y 6° de la Constitución Política de la República; 3° de la Ley N° 18.575 y demás pertinentes, se resuelve:

I.- Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar a don Regulo Jaime Illanes Silva, la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos); y a los Sres. Sergio Estanislao Arenas Cortes, Celso Nasario Calfullán Campos, Juan Erasmo Puga Chaparro y Filemón Santander Escobar y doña Patricia Waleska Guzmán Venegas, la suma de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos), a cada uno de ellos, con los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX

«RIT»

Foja: 1

reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo sexto que precede.

II.- Que no se condena en costas al Fisco al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2080-2020

Pronunciada por doña Paulina Sánchez Campos, Juez Suplente del Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Septiembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DXFEXBDWJVX